

TEMA 60

ASPECTOS JURÍDICO - PENALES DE LA CIRCULACIÓN: LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. FALTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO. OMISIÓN DEL DEBER DEL SOCORRO. POSIBLES DELITOS DE FALSIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL TRÁFICO. ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS. MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE PENAS Y SANCIONES. EL DECOMISO DEL VEHÍCULO. LA FISCALIA ESPECIAL PARA DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

1. ASPECTOS JURIDICO-PENALES DE LA CIRCULACIÓN: LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO.

- 1.1. INTRODUCCIÓN.
- 1.2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL.
- 1.3. ART. 379 CP.
- 1.4. ART. 380 CP.
- 1.5. ART. 381 CP.
- 1.6. ART. 382 CP.
- 1.7. ART. 383 CP.
- 1.8. ART. 384 CP.
- 1.9. ART. 385 CP.
- 1.10. ARTS. 623.3 Y 244 CP: EL ROBO DE VEHÍCULOS.

2. FALTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO.

- 2.1. ART. 621 CP.
- 2.2. ART. 636 CP.

3. OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO.

4. POSIBLES DELITOS DE FALSIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL TRÁFICO.

- 4.1. FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO.
- 4.2. LAS PLACAS DE MATRÍCULA.

5. EL ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS.

6. MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE PENAS Y SANCIONES.

- 6.1. INTRODUCCIÓN.
- 6.2. MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LAS PENAS EN EL MARCO DEL CP. REFORMA LO 10/1995.
- 6.3. RÉGIMEN LEGAL DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.
- 6.4. LA PENA DE MULTA.
- 6.5. LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

7. EL DECOMISO DEL VEHÍCULO.

- 7.1. INTRODUCCIÓN.
- 7.2. NATURALEZA JURÍDICA.
- 7.3. CRITERIOS.
- 7.4. DESTINO.

- 7.5. LA TITULARIDAD DEL VEHÍCULO. LOS TERCEROS DE BUENA FE.

8. LA FISCALIA ESPECIAL PARA DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

1. ASPECTOS JURIDICO-PENALES DE LA CIRCULACIÓN: LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRAFICO

1.1. INTRODUCCIÓN Y CAMBIOS NORMATIVOS EN EL CÓDIGO PENAL

El hombre, como uno de los tres elementos fundamentales (junto con la vía y el vehículo) del fenómeno de la circulación, puede mediante su actuación realizar conductas susceptibles de tipificación penal; de tal modo que nuestro comportamiento como conductor, como viajero en un vehículo o incluso como peatón puede ser constitutivo de delito o falta. De ahí la necesidad de que el legislador penal sancione como delito o como falta determinadas actuaciones ligadas a la circulación.

Características comunes de los delitos:

El Código Penal (en adelante CP), aprobado mediante Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, recoge los delitos contra la seguridad vial entre los delitos contra la seguridad colectiva (Título XVII), en concreto en los artículos 379 a 385 ter.

Estos delitos se encuadran dentro de los delitos de peligro y se caracterizan según distinguen, entre otros, Rodríguez Devesa por:

- 1) Ser delitos de mera actividad: Para su consumación basta con que se pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos, no siendo necesario el resultado de lesión. De este modo, en los delitos de peligro el legislador sanciona no un resultado lesivo, sino la realización de conductas que llevan alta probabilidad de lesionar un bien jurídico. Destacan, entre otros, los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, conducir a velocidad excesiva o de modo peligroso, obstaculizar o perturbar gravemente la circulación, la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o para la detección de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y la conducción sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción o tras haber sido privado de él.
- 2) Son delitos en los que, además de proteger un bien jurídico propio, en todos ellos se protege también la seguridad vial.

El capítulo IV del Título XVII del Libro II regula bajo la rúbrica “De los delitos contra la Seguridad Vial” artículos 379 a 385 ter.

1.2. MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL.

De entre las modificaciones del Código Penal, nos centraremos en aquéllas que han tenido impacto en el ámbito de los delitos y faltas contra la seguridad vial, al ser objeto de estudio en el presente tema.

El 1 de octubre de 2004 entró en vigor la **Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre** (BOE nº. 283 de 26 de noviembre) que modificó el Código Penal. Esta

reforma adaptó los tipos ya existentes e introdujo nuevas figuras delictivas de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales, con el fin de conseguir que el ordenamiento penal diera una respuesta efectiva a la realidad delictiva. De este modo, resultaron modificados los artículos 195, 244, 379, 381, 382, 623 y 636 (estos dos últimos relativos a faltas).

En la modificación del Código Penal operada mediante la **Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre**, se definen con mayor rigor todos los delitos relacionados con la seguridad vial, evitando que determinadas conductas calificadas como violencia vial puedan quedar impunes. El objetivo es incrementar el control sobre el riesgo en los excesos de velocidad que se han de tener por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma consideración.

Como importante novedad se incorpora un precepto sancionador que castiga la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente, del derecho a hacerlo, así como por quienes nunca hubieran obtenido permiso o licencia de conducción. Las penas se incrementan notablemente, en especial en lo concerniente a la privación del permiso de conducción. Además, se introducen como pena en los delitos contra la Seguridad Vial los trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta modificación entró en vigor el 2 de diciembre de 2007, salvo el párrafo segundo del artículo 384 (la conducción por quien está privado judicialmente del permiso o licencia de conducción o sin haber obtenido nunca el permiso o licencia), que entró en vigor el 1 de mayo de 2008.

Asimismo, conviene hacer referencia a la reforma introducida por la **Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio**, por la que se modifica el Código Penal.

En la búsqueda de una mayor proporcionalidad en la respuesta jurídico-penal a determinadas conductas de peligro abstracto, concretamente en el ámbito de los delitos contra la seguridad vial, el legislador ha considerado conveniente reformar los artículos 379 y 384 en un triple sentido:

En primer lugar, se equipara la pena de prisión prevista para ambos delitos, al entender que no existe razón de fondo que justifique la diferencia en la respuesta punitiva.

Por otra parte, se elimina la actual disyuntiva entre la pena de prisión y la de multa y trabajos en beneficio de la comunidad, estableciéndose los tres tipos de penas como alternativas. De este modo se concede un mayor grado de arbitrio al Juez a la hora de decidir sobre la imposición de cualquiera de las tres penas previstas, permitiendo reservar la pena de prisión, como la de mayor gravedad, para supuestos excepcionales.

De otro lado, superando el sistema existente en el que únicamente se prevía para el caso del delito del artículo 381, se introduce un nuevo artículo 385 bis en el que se establece que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Por último, se añade también un nuevo artículo 385 ter, que establece que en los supuestos de imposición de la pena de prisión, tratándose de los delitos

contenidos en los artículos 379, 383, 384 y 385, se concede a los jueces la facultad excepcional de rebajarla en grado atendiendo a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.

Además, por Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente se añadió el artículo 382 bis.

El Preámbulo de dicha Ley Orgánica ya expone su fundamento:

La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes:

- 1. ° La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave.**
- 2. ° El aumento de la punición de este tipo de conductas.**
- 3. ° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.**

Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave.

El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor.

Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2.º o 3.º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado.

Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381.

En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurren los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.

1.3. ARTÍCULO 379 CP

1. *El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.*

2. *Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.*

- **Sujeto activo:** quien conduce un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 o en 80 kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente o bajo la influencia de los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
- **Sujeto pasivo:** la colectividad de personas que se puede ver afectada por esa conducción.
- **Bien jurídico protegido:** la seguridad vial.

Velocidad.

En lo relativo a las velocidades excesivas aparece como diferencial el exceso de velocidad en función del tipo de vía. Así, se tipifica como delito superar los 60 kilómetros por hora en vía urbana o los 80 kilómetros por hora en vía interurbana, excesos ambos referidos a la velocidad permitida reglamentariamente.

En este sentido cabe hacer una doble precisión:

Por un lado, la interpretación de la expresión “permitida reglamentariamente” implica que dicha velocidad debe ser la establecida en cada caso y en cada vía concreta, admitiendo que la velocidad puede ser la genérica de la vía según el tipo y también la velocidad específica regulada por señalización adecuada, entrando también dentro de esta casuística la velocidad específica fijada en tramos de obras o la indicada a través de un panel de mensaje variable.

Por otro lado, los límites de velocidad a computar en el delito del art. 379.1 CP no son sólo los de la vía, sino además los que puedan afectar a la clase de vehículo (ej: vehículo especiales) y/o a la condición del conductor (ej: Código comunitario armonizado 05.04 limitación personal de velocidad).

Alcohol y drogas.

La redacción anterior del artículo 379 castigaba la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, lo que produjo una discusión doctrinal y jurisprudencial sobre si era suficiente con superar los límites previstos en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación o debía demostrarse la influencia negativa que el alcohol tiene en la conducción.

Tras la modificación operada mediante la Ley orgánica 15/2007, anteriormente mencionada, y para una mayor concreción en la tipificación penal, se ha añadido un plus, al castigar como delito la conducción con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, con independencia de que esta tasa de alcohol afecte o no a la conducción.

La reciente reforma del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LSV), mediante la Ley 6/2014, de 7 de abril, ha ahondado en la diferenciación entre infracción administrativa e infracción penal en los supuestos de conducción con drogas:

- La Ley prohíbe conducir con **presencia** de drogas en el organismo del conductor, quedando excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica (siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción del art. 9 LSV). En este caso, nos encontramos ante una **infracción administrativa** castigada con una sanción de multa de 1.000 euros y con la detracción de 6 puntos.

- En cambio, si se conduce **bajo la influencia** de drogas, la vía que corresponde ya no es la administrativa sino la **penal**, tal como está recogido en el artículo 379.2 CP estudiado.

1.4. ARTÍCULO 380 CP

1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior.

- **Sujeto activo:** quien condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.
- **Sujeto pasivo:** la persona o personas cuya vida o integridad física se pone en peligro.
- **Bien jurídico protegido:** la seguridad vial y la seguridad de la vida e integridad física de las personas. Es un delito de peligro concreto.

Han de concurrir dos elementos para la comisión del delito:

- **Temeridad manifiesta:** El apartado 2 del artículo dispone que se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero (conducir a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente) y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior (conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro o con influencia de drogas,...).
- **Poner en concreto peligro la vida o integridad de las personas:** No se trata de un peligro potencial (presente en la mayor parte de las infracciones a las normas de circulación), sino de un “concreto peligro”; es decir, se exige que el peligro sea concreto y determinable, aunque no haya llegado a determinar un daño.

1.5. ARTÍCULO 381 CP

1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

- **Sujeto activo:** quien con manifiesto desprecio por la vida de los demás condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.
- **Sujeto pasivo:** la persona o personas cuya integridad física o cuya vida se pone en peligro.

- **Bien jurídico protegido:** la seguridad vial y la seguridad de la vida e integridad física de las personas. Es un delito de peligro concreto

2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.

Sujeto activo: quien con manifiesto desprecio por la vida de los demás condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y sin poner en peligro la vida o la integridad de las personas.

Sujeto pasivo: la colectividad de personas que se puede ver afectada por esa conducción.

Bien jurídico protegido: la seguridad vial.

1.6. ARTÍCULO 382 CP

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

En este artículo se dispensa el tratamiento del concurso de leyes a lo que en realidad es un concurso de delitos, ofreciendo una específica regla cuando se hubiera ocasionado además del riesgo prevenido un resultado lesivo.

Por ley Orgánica 2/2019 , de 1 de marzo, que modifica el Código Penal, se añade el artículo 382 bis

«Artículo 382 bis

1. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente.

2. Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

3. Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.»

1.7. ARTÍCULO 383 CP

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Tras modificación del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 15/2007, la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica pierde su innecesario calificativo de delito de desobediencia y pasa a ser autónomamente castigada.

Por lo que a la prueba de alcoholemia se refiere, el artículo 21 del Reglamento General de Circulación (RGC), establece que:

“Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.

Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del texto articulado).

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas:

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento.

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad”.

El artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, en su texto consolidado tras modificación por Ley 18/2021, de 20 de diciembre señala:

«1. No puede circular por las vías objeto de esta Ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por litro.

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10.»

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley.
...

En cuanto a las pruebas establecidas para la comprobación de si el conductor lo hace bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas el artículo 28 del RGC establece que, *“toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las enumeradas en el artículo 21 del presente Reglamento, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda obligada a someterse a las pruebas”*.

- **Sujeto activo:** quien se niegue a someterse a las pruebas de alcoholemia o para la detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes u otras sustancias análogas, en los supuestos previstos en los artículos 21 y 28 del Reglamento General de Circulación.
- **Sujeto pasivo:** la colectividad de personas que se puede ver afectada por la circulación y las Administraciones que ostenten la competencia del control y supervisión del tráfico.
- **Bien jurídico protegido:** la seguridad vial y las potestades administrativas de control y supervisión del tráfico.

1.8. ARTÍCULO 384 CP

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Con la introducción de este artículo en el Código Penal se acaba con una criticada ausencia en la regulación penal. En la redacción anterior no se castigaba penalmente la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente, del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia del mismo. Ciertamente es que algunos casos podrían tenerse como delitos de quebrantamiento de condena o de desobediencia, pero no todos. Por ello, se ha considerado más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles en un solo precepto sancionador.

- **Sujeto activo:** quien condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos, de privación del permiso o licencia por decisión judicial o sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.
- **Sujeto pasivo:** la colectividad de personas que se puede ver afectada por la circulación y las Administraciones que ostenten la competencia sancionadora en materia de tráfico y de expedición de autorizaciones administrativas para conducir.
- **Bien jurídico protegido:** la seguridad vial y las potestades administrativas sancionadora (párrafo 1º) y de expedición de autorizaciones administrativas para conducir (párrafo 2º).

1.9. ARTÍCULO 385 CP

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:

1ª. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.

2ª. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

Son delitos de peligro, sin que sea necesario un resultado lesivo.

En el primer apartado se castiga una acción, como es alterar por cualquier medio y de modo imprevisible la seguridad del tráfico.

En el segundo apartado se castiga una omisión, no restablecer la seguridad vial, cuando haya obligación de hacerlo, entendiéndose que surge esa obligación siempre que se pueda restablecer la seguridad vial sin peligro propio para quien la restablece.

- **Sujeto activo:** quien origine un grave riesgo para la circulación.
- **Sujeto pasivo:** la colectividad de personas que se puede ver afectada por circular por la vía donde se haya originado el grave riesgo para la circulación.
- **Bien jurídico protegido:** la seguridad vial.

El artículo 385 bis CP confiere el carácter de **instrumento del delito** al vehículo o ciclomotor con el que se hubiera cometido cualquiera de los delitos contemplados en el Capítulo, el cual podrá ser decomisado según lo dispuesto en el art. 127 CP según nueva redacción por LO 1/2015 de 30 de marzo.

En la comisión de estos delitos suelen utilizarse vehículos o motocicletas de alta cilindrada que tienen un relevante valor pecuniario. El destino de los bienes decomisados será su venta, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la Ley no previera otra cosa y si no lo son, se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.

El Juez, no obstante, **podrá no decretar ese comiso** amparándose en el art. 128 CP, siempre que el vehículo **sea de lícito comercio** y **concurran alguna de estas circunstancias**:

- Su **valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal.**
- Se hayan **satisfecho completamente las responsabilidades civiles.**

Atenuación por menor entidad del riesgo

El artículo 385 ter Código Penal establece que el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en los **delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385 CP**, en atención a las siguientes circunstancias:

- **Menor entidad del riesgo causado**
- **Restantes circunstancias del hecho**

1.10. ARTÍCULO 623.3 CP Y 244 CP: EL ROBO DE VEHÍCULOS.

El artículo 623.3 CP regula como falta contra el patrimonio la sustracción o utilización sin la debida autorización, sin ánimo de apropiárselo, de un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, si el valor del vehículo utilizado no excediera de 400 euros, castigándola con localización permanente de cuatro a 12 días o multa de uno a dos meses.

Si el hecho se ejecutase empleando fuerza en las cosas, se impone la pena en su mitad superior.

Si se realizara con violencia o intimidación en las personas, la pena fuere conforme a lo dispuesto en el artículo 244 CP (delito de robo y hurto de uso de

vehículos). Es decir, estas sustracciones de vehículos a motor o ciclomotor con violencia o intimidación en las personas no serían constitutivas de falta, sino de delito.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, establece entre sus principales novedades: la contenida en su disposición derogatoria única por la que deroga el libro III del Código, relativo a “ las faltas y sus penas” e introduce, al mismo tiempo, el novedoso concepto de delito leve. Esta modificación operada por la LO 1/2015 afecta no solo semánticamente en relación con las antiguas faltas, sino que modifica sustancialmente la tipicidad y el tratamiento procesal de las mismas desde el nuevo concepto de delito leve:

La falta de hurto de uso de vehículo a motor en cuantía inferior a 400 euros del art. 623.3 CP, pasa a estar tipificada como delito menos grave pero no leve del art. 244.1 CP.

NOTA:

Artículo 47 CP

“La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia.

(...)

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte, respectivamente”.

2. FALTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO

El Código Penal recogía en su texto antes de la reforma establecida por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las faltas reguladas en el Libro III del Código Penal, distribuyéndose en cuatro Títulos relativos a las faltas contra:

- I. Las personas.
- II. El patrimonio.
- III. Los intereses generales.
- IV. El orden público.

Las faltas referidas al fenómeno de la circulación estaban previstas en:

- el Título I *Contra las personas* a través del **artículo 621 CP** sobre faltas contra las personas por imprudencia.
- el Título II *Contra el patrimonio* a través del **artículo 623.3 CP**, al que nos hemos referido anteriormente.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, establece entre sus principales novedades: la contenida en su disposición derogatoria única por la que deroga el libro III del Código, relativo a “ las faltas y sus penas” e introduce, al mismo tiempo, el novedoso concepto de **delito leve**. Esta modificación operada por la LO 1/2015 afecta no solo semánticamente en relación con las antiguas faltas, sino que modifica sustancialmente la tipicidad y el tratamiento procesal de las mismas desde el nuevo concepto de delito leve.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 13: “1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve”

2.1. Artículo 621 del Código Penal: La imprudencia grave con resultado de lesiones atenuadas y leve con resultado de lesiones o muerte cometidas con vehículo a motor o ciclomotor.

El art. 621 CP disponía que:

“1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

3. Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de delito serán castigados con pena de multa de 10 a 30 días.

4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses a un año.

5. Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año.

6. Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.

Llegados a este punto, convenía incidir en la diferencia entre una imprudencia leve o grave, pues en caso de que el resultado de la misma sea de muerte, estaremos ante una falta (art. 621 CP) o un delito (art. 142 CP) en función de cómo califiquemos la imprudencia.

En este sentido, y en relación con las imprudencias relativas al tráfico, podemos señalar la definición de la Sala 2ª. del Tribunal Supremo sobre **imprudencia grave**: “la más grave infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial” o la “vulneración de las reglas más elementales de cautela o diligencia exigibles en la conducción”; mientras que en la **imprudencia simple o leve** se acusa la “omisión de la atención normal o debida en relación con los factores circunstanciales de todo

orden que definen el supuesto concreto” o “la infracción de un deber de cuidado de pequeño alcance”.

Resultaba por tanto extraordinariamente difícil establecer criterios genéricos que puedan automatizar en alguna medida ese proceso selectivo, pero, pese a todo, parece oportuno recordar algunos pronunciamientos jurisprudenciales sobre esa delicada delimitación en el ámbito del tráfico.

En concreto, se ha estimado gravemente imprudente, atendidas las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado,: circular a velocidad excesiva rebasando el vehículo que se encontraba detenido ante un paso de peatones (STS 720/2003, de 21 de mayo); conducir con exceso de velocidad en una población (SSTS 12.12.89 y 8.5.97); salirse de la calzada e invadir la calzada opuesta (SSTS 15.4.02, 19.6.87); la inobservancia de preferencias de paso en un cruce (STS 22.4.87); rebasar semáforos en rojo (SSTS 1920/2001, de 26 de octubre, 95/1997, de 27 de enero); adelantar sin visibilidad (STS 26.4.1990) o conducir sin prestar atención alguna a las incidencias viarias (STS 14.11.92).

Por modificación de Lo 1/2015 ya referida, la Falta de lesiones con tratamiento médico de menor entidad cometidas por imprudencia grave del art. 621.1 CP, pasan a estar tipificadas como delito menos grave pero no leve de acuerdo con el vigente art. 152.1 CP.

- La falta de homicidio por imprudencia leve del antiguo artículo 621.2 CP se destipifica y se remite a la tutela jurisdiccional civil .

- La falta de lesiones por imprudencia menos grave o leve del art. 621.3 CP se destipifica, excepto las de especial gravedad subsumibles en el art. 152.2 CP.

Hay que destacar el texto consolidado del artículo 152 y el nuevo artículo 152 bis del Código penal:

Artículo 152

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1. ° Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

2. ° Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

3. ° Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la

conurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años.

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal.

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

El Artículo 152 ha sido redactado por el apartado tres del artículo único de la L.O. 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente («B.O.E.» 2 marzo). Vigencia: 3 marzo 2019

Artículo 152 bis

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado.

Artículo 152 bis introducido por el apartado cuatro del artículo único de la L.O. 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente («B.O.E.» 2 marzo). Vigencia: 3 marzo 2019

2.2. Artículo 636 del Código Penal: El seguro obligatorio del automóvil

La Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó el Código Penal, dio una nueva redacción al artículo 636 (añadiendo un segundo párrafo), despenalizando los supuestos de conducción de vehículos a motor y ciclomotor careciendo del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Por ello, tal conducta es desde el 1 de octubre de 2004 sólo objeto de infracción administrativa.

El artículo 636, dentro de las faltas contra el orden público establece, que:

“Los que realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran legalmente para el ejercicio de aquéllas serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.

No se considerará comprendida entre las actividades a las que se refiere el párrafo anterior la conducción de vehículos a motor y ciclomotores”.

Por Ley Organica 1/2015, La falta de ejercicio de actividades careciendo de seguro obligatorio del art. 636 CP se destipifica y es sancionada por el derecho administrativo.

3. LA OMISION DEL DEBER DE SOCORRO.

Los artículos 195 y 196 del Título IX del Libro II del Código Penal (“De la omisión del deber de socorro”) regulan:

Artículo 195.

“1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiese hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años”.

Artículo 196.

“El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años”.

En primer lugar, cabe señalar que se trata de un delito de pura omisión, puesto que no se castiga la producción de un resultado o la realización de una conducta. En este delito ni se ha de producir un resultado, ni el sujeto debe realizar ninguna acción; justamente se le castiga porque no hace lo que se espera que haga, es decir, hay una especie de acción esperada que el sujeto no lleva a cabo. Lo que

se castiga en el art.195 CP es no auxiliar, no socorrer a la persona que se encuentra desamparada y en peligro de sufrir un grave daño.

Sobre ello se pueden hacer algunas precisiones:

- Por persona desamparada debemos entender aquélla que es incapaz de salir por sí misma de la situación en la que se encuentra, es decir, la persona que es incapaz por sí misma de superar ese peligro al que se enfrenta.
- Por otro lado, el peligro grave debe estar circunscrito a su vida y a su salud: Una persona que está malherida, que está gravemente enferma, cuya vida o salud corre peligro. No debe confundirse con el delito de omisión del deber de impedir delitos.
- Lo que se castiga es no auxiliar cuando puede hacerse sin riesgo personal, con independencia de que tenga éxito la ayuda o no la tenga; y el resultado, de producirse, se imputará al causante del accidente, es decir, al que ha causado las lesiones de esa persona que se encontrara en esa situación de desamparo.
- El delito, por lo tanto, puede cometerlo cualquier persona que por proximidad física pudiera prestar la ayuda y no lo hace. Por ejemplo, el automovilista que pasa por el lugar donde hay una persona malherida que ha tenido un accidente y no para a ayudar.
- El deber de ayudar es un deber limitado:
 - Para que la omisión sea constitutiva de delito es preciso que el sujeto pueda prestar alguna ayuda.
 - También es preciso que la ayuda sea necesaria. Si alguien tiene un accidente y está herida, pero ya está atendida por otras personas que han parado a socorrerla, en ese caso otros que pasen por el lugar, aunque no se detengan, no cometen delito, puesto que, aunque la persona no puede valerse por sí misma, ya no se encuentra en situación de desamparo.
 - Otra limitación se encuentra en el riesgo que se pueda derivar para la persona que ayuda. Cuando hay un riesgo para la persona que puede auxiliar, el deber desaparece y, por tanto, si no presta su ayuda no incurre en el delito de omisión del deber de socorro.
 - Si alguien no prestara ayuda y quedara perfectamente claro que su ayuda no tenía la menor probabilidad de salvar el bien jurídico, el hecho podría resultar también atípico.
 - El deber cesa, y por consiguiente, no prestar ayuda no determinaría la aplicación del tipo penal, cuando se ha producido ya la muerte de la persona desamparada; es decir, no atender a una persona fallecida, no detenerse, podría considerarse insolidario, pero no constituye delito, puesto que, al no haber una persona desamparada sino fallecida, el bien jurídico vida ya no es objeto de protección.

En cuanto al bien jurídico protegido, existen dos puntos de vista:

- La doctrina mayoritaria considera que el bien jurídico protegido es la solidaridad humana, es decir, que el legislador penal castiga a quien no lleva a cabo la conducta esperada, puesto que se entiende que es exigible a todas las personas esa solidaridad con quien se encuentra en una situación de desamparo.
- Una doctrina minoritaria sostiene que el bien jurídico protegido es la vida y/o la salud de las personas, en la medida en que entienden que los deberes morales no son deberes jurídicos y por ello el Derecho Penal debe operar exclusivamente en la protección de bienes penalmente relevantes, no considerando un deber moral penalmente relevante, de manera que no se puede derivar de él la existencia de un injusto.

Existe también una segunda modalidad de omisión que se produce cuando quien no pudiendo auxiliar a la persona desamparada no pide ayuda a quien sí puede prestarla, de manera que si, por ejemplo, una persona ve a otra malherida y no sabe cómo ayudar y no llama a una ambulancia, incurre también en el delito de omisión del deber de socorro.

Hay una modalidad agravada en el artículo 195.3 CP que establece que *“Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años”*.

El presupuesto inicial es el mismo para cualquiera de estas modalidades: no prestar auxilio, no pedir ayuda cuando no puede prestarse el auxilio o la modalidad agravada. Todas presuponen que una persona se encuentre en una situación de desamparo y el peligro manifiesto grave para su vida, integridad y/o salud. La peculiaridad de la modalidad agravada es que esa situación en la que se encuentre la víctima haya sido provocada, creada, de manera fortuita o de manera imprudente por quien a continuación no presta auxilio.

En los supuestos de no prestar auxilio o no solicitarlo cuando no se puede prestar, se parte de la premisa de que hay una persona que se encuentra en una situación en la que no se puede auto-auxiliar.

Sin embargo, en la modalidad agravada es necesario que la situación haya sido creada por quien a continuación omite el auxilio, por quien no auxilia a la persona desamparada, pero sólo cuando esa situación haya sido creada imprudentemente o de manera fortuita, puesto que si se ha creado dolosamente el deber de socorrer no existe y por lo tanto la omisión no se castiga. Por ejemplo, si una persona atropella a otra conscientemente porque quiere matarla y luego se marcha, no existe omisión del deber de socorro, sino homicidio consumado o tentativa de homicidio, de manera que no habrá concurso con el delito de omisión del deber de socorro.

Pueden darse otras situaciones:

- Si la situación se ha creado fortuitamente (por ejemplo, un conductor que circula correctamente, pero imprevisiblemente se produce un atropello), habrá

unas lesiones o una muerte, pero, al tratarse de un caso fortuito, esa persona no incurre en responsabilidad penal. Sin embargo, si a continuación se marcha y dejara abandonada a la persona que ha atropellado, en ese caso sí habría responsabilidad penal, ya que incurriría en el delito de omisión del deber de socorro en su modalidad agravada.

- Si el accidente no ha sido fortuito (por ejemplo, una persona que conduce de forma temeraria atropella a una persona y le causa unas lesiones), habrá unas lesiones por imprudencia grave y, si a continuación se marcha, en este supuesto habría un concurso real: por una parte las lesiones graves imprudentes y por otra la omisión del deber de socorro agravada.

Existe una última modalidad de omisión del deber de socorro: la denegación de asistencia sanitaria. Así como los demás supuestos de omisión del deber de socorro son delitos que están al alcance de cualquiera que pueda auxiliar a la persona desamparada sin ninguna cualificación especial, en esta modalidad hace falta que esa persona ostente la condición de personal sanitario, enfermero, médico,...; siendo los elementos del delito los siguientes:

- Que haya un profesional sanitario que incumpla sus obligaciones específicas y deniegue, con ese incumplimiento, asistencia sanitaria a quien lo precisa.
- También se contempla el supuesto de abandonar el servicio, siempre que como consecuencia de esa denegación o como consecuencia de ese abandono del servicio se cree un riesgo para la salud de las personas.

Cuando el precepto penal se refiere a que comete el delito el personal de la sanidad que incumple sus obligaciones específicas, quiere decir que el hecho de que una persona sea médico no significa que haya de estar de servicio las 24 horas del día y que deba atender a toda persona que reclame sus servicios. Lo que se castiga es que aquel profesional sanitario que, de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio de la medicina y de acuerdo con su condición específica, particularmente en el ámbito de la medicina pública, tiene unas obligaciones, y si no atiende a quien precisa de su asistencia y tiene obligación de prestársela o abandona el servicio con los mismos resultados, comete este delito de omisión del deber de socorro de personal sanitario.

4. ESTUDIO DE LOS POSIBLES DELITOS DE FALSIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL TRÁFICO.

4.1. Falsedad en documento público o privado.

No existe en la actualidad un artículo o Sección del Código Penal dedicado a castigar los delitos de falsificación relacionados con el tráfico. Por ello, resultan de aplicación las normas generales en lo que a la falsificación se refiere.

El artículo 26 del Código Penal dispone que, a efectos de dicho texto, se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. El Código Civil define los documentos públicos en el artículo 1216 como aquéllos

autorizados por un Notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley.

Así pues, las autorizaciones administrativas expedidas por la Dirección General de Tráfico (como, por ejemplo, el permiso de circulación y el permiso de conducción) son documentos públicos susceptibles de ser falsificados.

Por ello, cuando se incurra en falsificación de una autorización administrativa, el autor del presunto delito será castigado con alguna de las penas que prevé la Sección 1ª. “De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación” del Código Penal (artículos 390 a 394 CP).

No sólo la falsificación de documentos públicos puede ser constitutiva de delito; también se incluyen dentro de los delitos de falsificación relacionados con el tráfico la falsificación de los documentos privados.

Así, existe una gran variedad de documentos privados que se presentan habitualmente en las Jefaturas Provinciales de Tráfico para la tramitación de expedientes administrativos en materia de tráfico. Por ejemplo, una factura (en un expediente de matriculación), un contrato de compraventa (en un expediente de cambio de titularidad), un certificado médico (en un expediente de obtención o prórroga de un permiso de conducción), etc. En caso de falsificación de documentos privados y certificados en materia de tráfico habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 395 y 399 del Código Penal (Secciones 2ª. y 3ª.).

4.2. Las placas de matrícula.

En la actualidad la falsificación de placa de matrícula ha desaparecido como tipo penal propio del Código Penal, pero se encuentra subsumido en el tipo general de falsificación de documentos públicos.

Tal como interpreta la Fiscalía General del Estado en su consulta 3/1997, la supresión del artículo 279 bis CP sólo afecta a la omisión de la placa de matrícula legítima de un vehículo, puesto que las demás conductas (falsificación y alteración de placa, sustitución,...) pueden incluirse en los artículos de la citada Sección 1ª.

Se incluye la placa de matrícula dentro de la ya mencionada definición del artículo 26 del Código Penal, puesto que la exhibición de la placa de matrícula es el soporte material de un documento como es el permiso de circulación, que contiene entre otros datos uno fundamental: el del titular del vehículo.

5. EL ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS.

El artículo 244 del Código Penal, que regula el robo y hurto de uso de vehículos, dispone lo siguiente:

“1. . El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a

cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.”

****modificado su apartado 1 por LO 1/2015,de 30 de marzo****

2. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior.

3. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus respectivos casos.

4. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán, en todo caso, las penas del artículo 242” (que castiga con prisión de dos a cinco años, o en su mitad superior si se hiciera uso de armas el robo con violencia o intimidación en las personas).

Conducta típica: El robo y hurto de uso se caracteriza porque en él hay una sustracción o una utilización sin la debida autorización de un vehículo a motor o de un ciclomotor ajeno. Depende de si existe fuerza en las cosas, violencia o intimidación o no que el hecho se castigue como hurto de uso o como robo de uso.

Hurto y robo de uso tienen en **común** las siguientes **características**:

1. Constituye un rasgo esencial de este delito que no exista ánimo de lucro en el sujeto que realiza la sustracción o la utilización, que no haya ánimo de lucro en el sentido estricto del propósito del sujeto de incorporar a su patrimonio la cosa mueble ajena sustraída. Aquí no existe ese ánimo de incorporación al propio patrimonio, sino que sólo hay ánimo de utilizarlo, no de quedarse el coche o el ciclomotor.

2. Si de lo que se trata es solamente de utilizar el coche durante un cierto periodo de tiempo, tendremos que concluir que el bien jurídico protegido no es la propiedad, sino el derecho de uso y disfrute del vehículo que puede coincidir o no con la titularidad del mismo (como, por ejemplo, un vehículo arrendado a un tercero).

3. El sujeto pasivo, por tanto, es el titular de esa facultad de uso, el cual no tiene que coincidir necesariamente con el propietario del vehículo.

4. Lo que se castiga es por una parte el sustraer un vehículo a motor o ciclomotor para usarlo y por otra utilizar un vehículo a motor o un ciclomotor sin la debida autorización.

Sustraer un vehículo a motor obviamente significa apoderarse de él, normalmente por el procedimiento de ponerlo en marcha, arrancarlo y marcharse con el vehículo.

En cuanto a la utilización, hay que tener en cuenta que lo que se castiga es utilizar el vehículo para la finalidad que le es propia (para desplazarse). Si un individuo se introduce dentro de un coche para resguardarse de la lluvia o para pasar la noche más abrigado no está haciendo el uso típico que se castiga en el artículo 244 del Código Penal (es decir, el uso que se castiga en dicho tipo penal es el que implica llevarse el coche y utilizarlo para la finalidad para la que está concebido: para efectuar desplazamientos de un lugar a otro).

5. El objeto material del delito: El tipo penal habla de vehículo a motor y de ciclomotor. (Se incluye también el ciclomotor para salvar los problemas del concepto de vehículo de motor en la Ley de Seguridad Vial, que excluye a los ciclomotores, lo que dejaría las sustracciones de ciclomotores fuera del tipo).

6. En el aspecto subjetivo del delito hay que tener en cuenta que el sujeto debe actuar sin ánimo de apropiarse el vehículo o el ciclomotor, puesto que si hay ánimo de apropiación habrá un robo o un hurto. Simplemente ha de haber un ánimo de usar el vehículo a motor o el ciclomotor durante un cierto tiempo. (De todas maneras, cabe destacar que en quien efectúa un uso indebido del vehículo a motor ajeno sí existe un cierto ánimo de lucro; no de apoderamiento, pero sí un ánimo de lucro en sentido amplio, ya que durante un tiempo se va a beneficiar de las ventajas que supone disponer de un vehículo).

7. Es preciso que el vehículo a motor o ciclomotor sea devuelto en un plazo no superior a 48 horas. Si no se produce la devolución, entonces ya no correspondería apreciar esta figura, sino el delito de robo o hurto.

Se habla en el Código Penal de devolución directa o indirecta dentro de las 48 horas desde el momento de la sustracción. Hay que tener en cuenta que no es devolución el abandono del vehículo cuando se le agota el combustible o el que lo abandona ante una persecución policial.

Esta figura entra en juego cuando de alguna manera quien ha efectuado la sustracción o la utilización ilegítima se esfuerza mínimamente para que el que ostenta la potestad posesoria pueda recuperarlo, ya sea de manera directa o indirecta. (Una manera indirecta sería, por ejemplo, el hecho de dejar el coche mal aparcado para que se lo lleve la grúa y de ese modo se le comunicará al titular que su coche ha sido retirado).

Existen unas figuras agravadas cuando el hecho se realiza con fuerza en las cosas, cuando no se restituye en el plazo fijado en la ley y cuando se comete con violencia o intimidación:

- Si no se restituye, se castiga el hecho como robo o hurto, en función de si existió o no fuerza en las cosas (art. 237 y 234 del Código Penal respectivamente).

De los robos

Artículo 237

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Artículo 237 redactado por el número ciento dieciocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

De los hurtos

Artículo 234

1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.

Artículo 234 redactado por el número ciento quince del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

- Si se comete con violencia o intimidación, se aplica la pena del artículo 242 del Código Penal.

Cabe destacar en el artículo 234 Código penal tras al redacción dada por LO 1/ 2015, la importancia del bien , superior o inferior a 400 euros, que conllevara una pena u otra.

6. MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE PENAS Y SANCIONES.

6.1. Introducción.

Las medidas sustitutivas de penas tienen su origen en la evolución de los sistemas penales contemporáneos, en los que la prisión se ha ido reservando para la delincuencia grave, mientras que se ha ido buscando otra clase de consecuencias para delitos de menor gravedad .

La institución de la sustitución de la penas, significativamente de las que son privativas de libertad, es el reflejo de una orientación de la política criminal tendente a eliminar los efectos desocializadores y de estigmatización que conlleva la pena, especialmente desproporcionados por lo que respecta a las penas privativas de libertad de corta duración.

Pues bien, en el caso de las penas, el legislador viene estableciendo para determinados supuestos un sistema de sustitución de las penas por otras medidas más acordes con los principios de reeducación y reinserción, constitucionalmente consagrados en el apartado segundo del artículo 25: *“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (...)”*

En cuanto a las medidas sustitutivas de sanciones administrativas, en el ámbito de tráfico podemos señalar que éstas en la actualidad no se contemplan. No obstante, durante un tiempo sí que se contempló la posibilidad de que la cuantía de la sanción pecuniaria y el período de suspensión del permiso o licencia de

conducción pudieran reducirse hasta un 30 por 100 de su totalidad y sustituirse en esa parte, a petición del sancionado, por otras medidas también reeducadoras.

6.2. Medidas sustitutivas de las penas en el marco del CP. Reforma LO 10/1995.

La primera de las reformas mencionadas en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, como manifestación de la necesidad de adaptación de dicho código normativo a los valores constitucionales, y que se invoca como eje de los criterios inspiradores del mencionado texto, es, precisamente, la que afecta al sistema de penas.

Dentro de una reforma del sistema, que la propia exposición del Código califica de total, se destaca, además, entre otras, la sustitución de las penas privativas de libertad por otras que afecten a bienes jurídicos básicos.

La reforma operada por el Código Penal debe vincularse al intento de alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la propia Constitución asigna al sistema de penas. El legislador del '95 entiende pues que la reeducación y reinserción social que el artículo 25.2 de la Constitución Española señala como orientación de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad son objetivos más fácilmente alcanzables si se sustituyen dichas penas por otras, cuyas consecuencias sancionatorias presenten un carácter menos retributivo, tendente más bien hacia la reeducación y la reorientación. Así por ejemplo, los trabajos en beneficio de la comunidad o determinadas medidas educativas.

6.3. Régimen legal de la sustitución de las penas privativas de libertad.

Antes de afrontar el estudio de las distintas medidas sustitutivas de penas privativas de libertad, debemos detenernos en analizar los supuestos en que dicha sustitución puede operar: qué tipos de penas se pueden sustituir, qué condenados pueden beneficiarse de la sustitución, qué circunstancias se valoran y de qué manera se convierten las penas impuestas en medidas sustitutivas.

La regulación de estos aspectos viene básicamente recogida en el **artículo 88 del Código Penal**, el cual indica lo siguiente:

- Como norma general, las penas de prisión que no excedan de 1 año pueden ser sustituidas por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad.
- Excepcionalmente, también pueden sustituirse las penas de prisión que no excedan de 2 años por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad a reos no habituales cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social.
- En ningún caso pueden sustituirse penas que ya sean sustitutivas de otras.
- Como requisito subjetivo es necesario que el reo no sea habitual. Por otra parte, el Juez o Tribunal también tendrá en consideración las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado.

- La sustitución prevista es de un día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente.
- En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.

6.4. La pena de multa.

Siguiendo el ejemplo de otras legislaciones recientes, como la alemana, la austríaca, la italiana y la francesa, el Derecho penal español ha querido conceder a la pena de multa un papel mucho más importante al que le correspondía tradicionalmente.

Así, el Código Penal de 1995 extiende el uso de la multa con el objetivo de intentar una alternativa a las penas privativas de libertad en delitos poco graves y en las faltas.

La ventaja principal de la pena de multa es que, pese a poder afectar en forma sensible al patrimonio y a las posibilidades de actuación que el mismo supone, no menoscaba ningún bien personalísimo como la libertad, no arranca al sujeto de su entorno familiar ni le priva de su trabajo. Frente a la prisión, la pena de multa se presenta como una pena más humana y menos socializante.

La pena de multa está regulada en los artículos 50 y siguientes del Código Penal y sus características principales son las siguientes:

- Consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria.
- Se impondrá, salvo que la Ley disponga otra cosa, por el sistema de días-multa.
- Su extensión mínima será de 10 días y la máxima de 2 años (personas jurídicas máximo 5 años).
- La cuota diaria tendrá un mínimo de 2 € y un máximo de 400 € (personas jurídicas min. 30 € y máx. 5.000 €).
- Si el condenado no satisficiera, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente.

6.5. Los trabajos en beneficio de la comunidad.

Los trabajos en beneficio de la comunidad se encuadran dentro de las penas privativas de derechos. Se regulan en el artículo 49 del Código Penal y sus principales características son las siguientes:

- No podrán imponerse sin el consentimiento del penado, al cual obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
- Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas.
- La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.
- No atentará a la dignidad del penado.
- El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
- Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
- No se supeditarán al logro de intereses económicos.

Conviene hacer referencia también al Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, y, sobre todo, a la relevante modificación sufrida en virtud del Real Decreto 1849/2009.

En la Exposición de Motivos del Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, que establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad; se señala que la generalización del recurso a esta pena no ha venido acompañada, sin embargo, de la necesaria oferta de puestos de trabajo para su realización; y que en la práctica esta pena ha demostrado disfunciones que deben y pueden corregirse.

Entre los cambios más significativos introducidos para paliar las disfunciones señaladas destacan los siguientes:

- Se modifican, en primer lugar, las Instituciones obligadas a facilitar los trabajos para adecuar esta obligación a los términos establecidos por el vigente Código Penal, incluyendo de manera expresa la responsabilidad de las tres Administraciones (Estatal, Autonómica y Local), siendo las Administraciones locales y autonómicas, por su proximidad al penado y por sus fines y objetivos, las que están en mejores condiciones de llevar a cabo el cometido de ofertar tareas de utilidad social que permitan la reparación del daño causado por el delito.

- Se modifica, por otra parte, el procedimiento de ejecución, respondiendo a los principios de celeridad y simplificación de trámites, bajo el prisma de la coordinación precisa entre los órganos participantes en la misma.
- Se suprime el llamado segundo consentimiento del penado, que ha significado una fuente relevante de atrasos y disfunciones, ya que es innecesario y no está previsto en el artículo 49 del Código Penal, que sólo obliga al mismo con anterioridad a la imposición de la pena, no en un momento posterior.
- Se introduce la posibilidad de que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad pueda cumplirse mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial. La modificación atiende a la necesidad utilizar unos recursos ya existentes de utilidad pública, de similar naturaleza en su finalidad reparadora al delito cometido por el penado.

Conviene hacer referencia también al **Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas** y que deroga el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo hasta entonces vigente.

Detalla la Exposición de Motivos del RD 840/20011:

“La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha incidido de manera tan relevante en el sistema de medidas penales –penas y medidas de seguridad– diseñado por el vigente Código Penal, que por sí misma hace necesario un nuevo marco reglamentario regulador de las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión y sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad, del mismo modo que la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, determinó el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.

Así, respecto de la pena de localización permanente, pueden destacarse como novedades significativas la ampliación de su límite de cumplimiento, que como pena leve pasa de doce días a tres meses; su expresa previsión como pena menos grave, con duración comprendida entre tres meses y un día hasta los seis meses; la expresa regulación de su cumplimiento excepcional en centro penitenciario en régimen de fin de semana y días festivos, como respuesta apropiada para supuestos de reiteración de infracciones, actualmente limitadas a las faltas de hurto; la novedosa proyección de su ámbito de aplicación al marco de la sustitución de las penas privativas de libertad; y finalmente la habilitación de manera expresa a la Autoridad Judicial para que pueda acordar la utilización de medios de control mecánicos y electrónicos que permitan la localización del reo.

A su vez, respecto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad dicha reforma legal ha supuesto una clara ampliación de su contenido estricto, consistente en la prestación no remunerada de actividades de utilidad social, al contemplarse la posibilidad de la eventual participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación de contenido y proyección plural -laborales, culturales,

de educación vial, sexual y otros similares-, que si bien ya se había anticipado en el Real Decreto 1849/2009, de 4 de diciembre, que modificó el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, ahora ya no ve restringida su aplicación a infracciones relacionadas con la seguridad vial.

Además la reforma legal ha abordado una importante modificación de la regulación de las medidas de seguridad, que se articula entre otros aspectos, en primer lugar, en que se ha sustituido el catálogo de las medidas de seguridad no privativas de libertad, destacando la introducción de la libertad vigilada, que impone el cumplimiento por el sentenciado de ciertas obligaciones y prohibiciones judicialmente establecidas –a las que se han reconducido las medidas de seguridad suprimidas, juntamente con otras diferentes–, y a ello debe sumarse la previsión dentro de la libertad vigilada de una modalidad postpenitenciaria, cuya aplicación se reserva por la ley a una peligrosidad criminal asociada no ya a supuestos de inimputabilidad o semiimputabilidad, sino a la propia tipología delictiva, bien que limitada a casos muy tasados –delitos de terrorismo y ciertos delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Por otra parte la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha suprimido la intervención del Juez de Vigilancia en la dinámica del procedimiento revisor de las medidas de seguridad no privativas de libertad, dando así acogida al criterio establecido por el Tribunal Supremo, que a su vez asumió en este sentido anteriores advertencias doctrinales y de los propios Jueces de Vigilancia; tan solo se ha conservado su presencia en la custodia familiar y en relación con la libertad vigilada postpenitenciaria, atendida en este último caso la inmediata relación del Juez de Vigilancia con las Instituciones Penitenciarias a las que se confió el cumplimiento material de la pena de prisión, tras cuyo término se activa esta modalidad de libertad vigilada.

La necesidad de adaptar la actividad de las Instituciones Penitenciarias en relación con estas nuevas previsiones legales justifica, como se ha dicho, la necesidad de un nuevo marco reglamentario. Pero además se han incorporado varias novedades, de índole terminológica unas; nacidas otras de la conveniencia de racionalizar la intervención de las Instituciones Penitenciarias conforme a los cometidos naturales que le son propios; y finalmente, la reordenación del procedimiento de definición de los planes administrativos -de ejecución, o control e intervención y seguimiento-, otorgándole carácter ejecutivo, bien que sometido al necesario control judicial, ante las distorsiones originadas por el modelo aplicado hasta ahora.

Respecto de las novedades terminológicas, puede reseñarse en primer lugar la mención de los Servicios de gestión de penas y medidas alternativas, unidades administrativas dependientes de la Administración penitenciaria que están configuradas como equipos multidisciplinares en los que se integran los servicios sociales penitenciarios, y que tienen encomendado el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad; en segundo lugar la expresa referencia a la resolución o mandamiento judicial de la medida penal de que se trate, para designar la resolución que comunica a la Institución Penitenciaria su deber de activar el correspondiente plan de ejecución, o de intervención, control y seguimiento; y finalmente, la cita del órgano jurisdiccional competente para la ejecución, que viene a sustituir a la mención del Juez o Tribunal sentenciador: las nuevas realidades derivadas de la aparición de los Jueces de Ejecutorias y especialmente de la posibilidad que el Juez de Instrucción sea el juez sentenciador en los casos de conformidad contemplados en el trámite del artículo 801 de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal, se entiende que obligan a contemplar una nueva denominación de esa Autoridad Judicial a la que se atribuye la competencia de hacer ejecutar lo juzgado, que ya no necesariamente se corresponde con la tradicional denominación de Juez o Tribunal sentenciador.

Entre las demás novedades, cabe destacar las realizadas en la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Así, debe partirse de que la legislación impone que el cumplimiento de todas las penas y medidas de seguridad debe realizarse bajo el control de los Jueces y Tribunales, conforme a lo establecido en el art. 3.2 del vigente Código Penal; pero la existencia de un control judicial de ejecución presupone la existencia de una ejecución administrativa que pueda llegar a ser controlada, y en este sentido el mecanismo elegido por el Real Decreto 515/2005 era el de un control judicial a priori, basado en una propuesta de la Administración que en el caso del trabajo en beneficio de la comunidad el Juez de Vigilancia debía previamente aprobar, lo que en la práctica implicaba dificultades de notificación de las resoluciones judiciales a reos que no se encuentran a inmediata disposición del Juzgado correspondiente. En el nuevo modelo diseñado por el presente real decreto, ordenada la ejecución por el órgano jurisdiccional competente, articulada a través de la oportuna orden o mandamiento judicial de ejecución –o de control y seguimiento–, la Administración Penitenciaria procederá a su materialización, definiendo un plan administrativo que se concretará previa citación para audiencia del sentenciado, que tiene así la oportunidad de expresar sus prioridades individuales y sociales –familiares, educativas, laborales–; una vez notificado al sentenciado el plan, éste tiene ejecutividad, y el sentenciado deberá proceder a su cumplimiento escrupuloso, sin perjuicio de las facultades revisoras de la Autoridad Judicial a la que se confíe el control judicial de legalidad de la ejecución administrativa de la medida penal de que se trate, articuladas a través de la puesta en conocimiento del plan, sin perjuicio de que el sentenciado pueda oponerse al mismo.”

7. EL DECOMISO DEL VEHÍCULO.

7.1. Introducción.

La regulación del comiso en el Código Penal era anacrónica y contradictoria y desentonaba con el Derecho Comparado europeo. De alguna manera consideraba a la delincuencia de tráfico de “segundo grado”, pues los delitos contra la seguridad vial, a excepción del previsto en el antiguo art. 381 CP, eran los únicos delitos dolosos de peligro del Código Penal respecto de los que no cabía aparentemente la medida.

Por ello es relevante la reforma operada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el sentido de establecer que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128 CP.

Para ello se añade un nuevo artículo, el 385 bis CP, con la siguiente redacción:

“El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128”.

El art. 385 bis CP admite el comiso para todos los delitos contra la seguridad vial, refiriéndose la norma a los *“hechos previstos en este Capítulo”* sin excepciones.

Destacar la modificación del artículo 127 por Lo 1/2015, de 30 de marzo, que da lugar a la siguiente regulación de este articulado:

De las consecuencias accesorias

Artículo 127

1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.

Artículo 127 redactado por el número sesenta y uno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 127 bis

1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito:

...

d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia.

...

2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios:

1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.

2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.

3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.

4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.

Artículo 127 bis introducido por el número sesenta y dos del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 127 ter

1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,

b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o

c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido.

2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios racionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran impedido la continuación del procedimiento penal.

Artículo 127 ter introducido por el número sesenta y tres del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 127 quater

1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente a los mismos, en los siguientes casos:

a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito.

b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso.

2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso, cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado.

Artículo 127 quater introducido por el número sesenta y cuatro del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 127 quinquies

1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, efectos y ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado, cuando se cumplan, cumulativamente, los siguientes requisitos:

a) Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 127 bis.1 del Código Penal.

b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada.

c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa.

Son indicios relevantes:

○

1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada.

2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o

jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los bienes.

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.

Lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será de aplicación cuando consten indicios fundados de que el sujeto ha obtenido, a partir de su actividad delictiva, un beneficio superior a 6.000 euros.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá que el delito se ha cometido en el contexto de una actividad delictiva continuada siempre que:

a) El sujeto sea condenado o haya sido condenado en el mismo procedimiento por tres o más delitos de los que se haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o indirecto, o por un delito continuado que incluya, al menos, tres infracciones penales de las que haya derivado un beneficio económico directo o indirecto.

b) O en el período de seis años anterior al momento en que se inició el procedimiento en el que ha sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 127 bis del Código Penal, hubiera sido condenado por dos o más delitos de los que hubiera derivado la obtención de un beneficio económico, o por un delito continuado que incluya, al menos, dos infracciones penales de las que ha derivado la obtención de un beneficio económico.

Artículo 127 quinquies introducido por el número sesenta y cinco del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 127 sexies

A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las siguientes presunciones:

1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de tiempo que se inicia seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva.

A estos efectos, se entiende que los bienes han sido adquiridos en la fecha más temprana en la que conste que el sujeto ha dispuesto de ellos.

2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.

3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron adquiridos libres de cargas.

El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean aplicadas con relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias concretas del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas.

Artículo 127 sexies introducido por el número sesenta y seis del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). *Vigencia: 1 julio 2015*

Artículo 127 septies

Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a causa de la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por cualquier otra circunstancia, el juez o tribunal podrá, mediante auto, acordar el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito, que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho por un valor equivalente al de la parte no ejecutada del decomiso inicialmente acordado.

De igual modo se procederá, cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.

Artículo 127 septies introducido por el número sesenta y siete del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). *Vigencia: 1 julio 2015*

Artículo 127 octies

1. A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias.
2. Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos.
3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.

Artículo 127 octies introducido por el número sesenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). *Vigencia: 1 julio 2015*

Artículo 128

Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.

7.2. Naturaleza jurídica.

La naturaleza jurídica del comiso no es de pena ni medida de seguridad, sino de consecuencia accesoria, y ésta, según la doctrina, exige de peligrosidad objetiva. Por tanto, no se basa en el peligro en sí de la cosa, sino en cuanto se le atribuye a un determinado autor.

El comiso tiene además un efecto preventivo, en tanto en cuanto marca al conductor que la titularidad del automóvil no legitima todo acto de disposición o uso derivado de un concepto de propiedad absoluta, sino que está sujeto a limitaciones legales que preservan la vida e integridad física de los demás.

7.3. Criterios.

El art. 385 bis CP remite a los artículos 127 y 128 CP, siendo la fórmula del art. 127.1 CP imperativa (*"Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo (...)"*), aún cuando el art. 128 CP introduce una cláusula de facultatividad (*"podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso o decretarlo parcialmente"*) con los criterios que recoge. No está de más por tanto recordar que la decisión final sobre la declaración de comiso o no de un vehículo corresponde a la autoridad judicial.

En cuanto a posibles criterios para acordarlo, reproduciremos lo que a tal efecto dispone la Fiscalía de Seguridad Vial como supuestos en los que como norma general debe solicitarse el comiso a la autoridad judicial, sin entrar en cualquier caso en automatismos, exigiendo una valoración circunstancial de cada caso:

- a) En los casos de reincidencia múltiple (art. 66.5 CP), reveladores de una continuada actitud de rebeldía y oposición a la norma en los delitos de los arts. 379 y 384 CP. A tal efecto, el art. 66.5 CP señala que *"Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza (...)"*.
- b) Excepcionalmente, en los supuestos de un delito de conducción bajo la influencia del alcohol y drogas y exceso de velocidad punible con tasas de extraordinaria gravedad y generadoras de un intenso peligro que pueda dar lugar ya al juicio de peligrosidad. Se trata, por tanto, de supuestos extremos.
- c) En los delitos de negativa al sometimiento a las pruebas de detección de alcohol (sólo en los casos de reincidencia simple art. 22.8 CP) o conducción temeraria y con consciente desprecio de los arts. 380 y 381 CP, y con más rigor en carreras ilegales incardinables en estos preceptos.
- d) Con mayor exigencia también en los delitos de homicidio y lesiones imprudentes de los arts. 142 y 152 CP por su gravedad y como medida complementaria de protección a las víctimas de accidentes de tráfico, (recientemente modificados en su articulado por Ley Organica 2/2019) y en particular cuando van unidos al delito de omisión de socorro del art. 195.3 CP.

7.4. Destino.

Conviene reproducir el contenido del artículo 367 bis y 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan de manera detallada el destino del vehículo decomisado:

Artículo 367 bis. [Efectos judiciales en el orden penal]

“Tendrán la consideración de efectos judiciales, en el orden penal, todos aquellos bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal”.

Artículo 367 quinquies. [Formas de los efectos especiales]

“1. La realización de los efectos judiciales podrá consistir en:

- a) La entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas.*
- b) La realización por medio de persona o entidad especializada.*
- c) La subasta pública.*

2. Podrá entregarse el efecto judicial a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas cuando sea de ínfimo valor o se prevea que la realización por medio de persona o entidad especializada o por medio de subasta pública será antieconómica.

3. La realización por medio de entidad o persona especializada o mediante subasta pública se podrá llevar a cabo en todos los demás supuestos y se efectuará conforme a las normas que sobre esta materia se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se recabará el informe del Ministerio Fiscal y de los interesados.

El producto de la venta se ingresará en la cuenta de consignaciones del Juzgado o Tribunal y quedará afecto al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso, en el procedimiento, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido.

En el caso de venta de un bien embargado por orden de una autoridad judicial extranjera, el producto, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido, se ingresará igualmente en la cuenta de consignaciones del Juzgado y quedará a su disposición, circunstancia que le será comunicada sin dilación”.

7.5. La Titularidad del Vehículo. Los terceros de buena fe.

La protección de los terceros exige buena fe y adquisición legal. La norma del art. 127.1 inciso 2 CP (*“(…) serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente”*) nos enfrenta a la problemática de las titularidades administrativas del vehículo.

En este aspecto, no obstante, hay una consolidada doctrina jurisprudencial que prima la titularidad real sobre la formal del Registro de Tráfico. Para ello se atiende a la utilización habitual, posesión en concepto de dueño, pago del precio, pago de impuestos, seguro y en general cualquier otra prueba documental y testifical que obre en autos.

Respecto de los terceros propietarios, cabe la imputación a efectos de comiso

cuando son conscientes del riesgo jurídicamente desaprobado de comisión de delitos o derivado de las condiciones de utilización impuestas.

Como ejemplo de lo anterior podríamos señalar a un representante de una empresa de transporte de mercancías que impone unas condiciones de tiempo en los desplazamientos que hace que los empleados que utilicen los automóviles para el transporte de mercancías incidan en la comisión de infracciones de tráfico para cumplirlas, debiendo ponderarse que con ellas se obtiene un beneficio económico ilícito.

8. LA FISCALÍA ESPECIAL PARA DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

Aunque la Instrucción 11/2005 no la incluía como materia especializada, la preocupación de la Fiscalía General del Estado ante la incidencia y magnitud de las infracciones penales relacionadas con la circulación de vehículos a consecuencia del incesante incremento del tráfico rodado se puso de manifiesto en la Consulta 1/2006, de 21 de abril, sobre calificación jurídico penal de la conducción de vehículos de motor a velocidad extremadamente elevada, y en la Instrucción 3/2006, de 3 de julio, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, reclamando la atención específica y adecuada del Ministerio Fiscal para colocarse en primera línea de la respuesta punitiva frente a esta manifestación de la criminalidad.

En esta reacción institucional la unificación de criterios de actuación en la represión de los ilícitos penales de tráfico viario debe constituir un eficaz mecanismo para el correcto ejercicio de la función fiscal, buscando la respuesta proporcionada, disuasoria y efectiva frente a esta delincuencia que por las gravísimas consecuencias que ocasiona no puede quedar devaluada ante cierto sentimiento de impunidad, relajación en la fijación de perfiles de las figuras penales o adopción de criterios restrictivos en la calificación de determinadas conductas cometidas en su ámbito.

El Real Decreto 709/2006, de 9 de junio, que fijó la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2006, creó “en la cúspide de la Carrera Fiscal la plaza de Fiscal de Sala para coordinar la labor de persecución de los delitos contra el tráfico y la seguridad vial, ámbito en que -según su Exposición de Motivos- la sensibilidad del Gobierno y de toda la sociedad española ha aumentado considerablemente, teniendo en cuenta que ciertas conductas ilícitas relacionadas con la circulación de vehículos a motor son merecedoras de un tratamiento criminal y, en consecuencia, de la persecución pública, especialmente cuando se producen quebrantos en derechos tan elementales como la vida o la integridad física de las personas o daños en los bienes”.

La creación de la figura del **Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial** traduce operativamente el compromiso con la seguridad vial del Ministerio Fiscal desde la perspectiva del principio de especialización y de la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación plasmados en la Instrucción 11/2005 de la Fiscalía, que busca una respuesta adecuada a la siniestralidad vial y para promover la acción de la Justicia, cumpliendo el mandato del art 124 CE en las materias relativas a la seguridad vial.

FUNCIONES:

Entre las funciones de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial podemos destacar las siguientes:

- La coordinación y supervisión de las Secciones especializadas de las Fiscalías Territoriales, para lo que se recaban los informes oportunos y dirigiendo por delegación del Fiscal General del Estado las respectivas Redes de Fiscales especialistas, como foro de intercambio de información y difusión de criterios de actuación en todo el territorio nacional.
- La investigación de asuntos de especial importancia que el Fiscal General del Estado pueda asignar, tramitando las correspondientes diligencias de investigación, participando directamente o a través de los Delegados en el procedimiento en sus distintas fases y ejercitando las acciones oportunas.
- La proposición al Fiscal General del Estado de las Circulares e Instrucciones que considere necesarias y la elaboración de propuestas de resolución de las Consultas que se planteen sobre las materias de su competencia y la del impulso y participación en la adopción de Protocolos y Convenios de coordinación y colaboración con los demás organismos implicados en la prevención, erradicación y persecución de los delitos contra la seguridad vial.
- Facilitar una adecuada información y participación de las víctimas en el proceso, protegiendo sus derechos e intereses.

La mayoría de las funciones van destinadas fundamentalmente a cumplir los objetivos de unificación de criterios de actuación en la represión de los ilícitos penales de tráfico viario, así como de búsqueda de una respuesta proporcionada, disuasoria y efectiva frente a esta delincuencia que por las gravísimas consecuencias que ocasiona no puede quedar devaluada ante cierto sentimiento de impunidad, relajación en la fijación de perfiles de las figuras penales o adopción de criterios restrictivos en la calificación de determinadas conductas cometidas en su ámbito (tal como se adelantó anteriormente).

La Instrucción 5/2007 de la Fiscalía crea las Secciones especializadas de Seguridad Vial y la figura del Fiscal Delegado.

Las Secciones existirán en todas las Fiscalías territoriales, integradas en su organigrama como Unidades con específicos cometidos, cualquiera que sea su tamaño. La especialización coordinada en vertical, eje del cambio organizativo del Ministerio Fiscal que determina la creación de los Fiscales de Sala Coordinadores, comporta en todas las Fiscalías la constitución de las correspondientes Secciones especializadas de Seguridad Vial, conforme a un esquema homogéneo aún con diferencias en función de las plantillas y del volumen de actividad generado en cada caso.

En el funcionamiento de las Secciones la clásica organización territorial del Ministerio Fiscal se enriquece con la estructura funcional en vertical que la experiencia y alto grado de especialización de los respectivos Fiscales de Sala aportan, pero la eficacia de la labor de las Secciones requiere de los necesarios

medios materiales y personales que permitan hacer efectiva la exigencia de especialización del Ministerio Público.

Con el establecimiento de las Secciones especializadas de Siniestralidad Laboral, Seguridad Vial y Extranjería se pretende constituir redes de auténticos Fiscales especialistas que intervengan con absoluta garantía en los procesos jurídicos que originen tan sensibles materias, estando coordinados por el correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, aunque conservando el Fiscal Jefe de cada órgano territorial plena competencia organizativa y su posición de dirección en el organigrama jerárquico del Ministerio Fiscal.

Al frente de las respectivas Secciones debe situarse en todas y cada una de las Fiscalías un Delegado de la especialidad. Con esta figura se trata de articular una Red centralizada en el Fiscal de Sala desde la que se difundan y se intercambien argumentos jurídicos, actuaciones de las distintas Fiscalías, jurisprudencia de Audiencias y criterios que ayuden a la tarea unificadora.

El Fiscal Delegado o Coordinador ejerce similares funciones a las ya descritas para el Fiscal de Sala en el territorio de su jurisdicción bajo la dependencia del Fiscal Jefe y en estrecho contacto con el Fiscal de Sala de Seguridad Vial.

Entre las funciones que recoge la Instrucción 5/2007 relativa a las Secciones de Seguridad Vial están las siguientes:

- 1) Trasladará a los Fiscales las pautas de actuación en materia de seguridad vial generadas por la Fiscalía General del Estado y por el Fiscal de Sala Coordinador.
- 2) Asumirá directamente la llevanza de las causas relativas a seguridad vial de mayor entidad o complejidad cuando el Fiscal Jefe así lo determine.
- 3) Supervisará el seguimiento de las pautas unificadas de actuación alcanzadas en materia de seguridad vial.
- 4) Asumirá, cuando el Fiscal Jefe lo delegue, la redacción del informe anual sobre seguridad vial a integrar en la Memoria.
- 5) Se encargará de mantener, cuando el Fiscal Jefe lo delegue, las reuniones periódicas procedentes con autoridades gubernativas con competencia en la materia, Guardia Civil de Tráfico y Policías Autonómicas y Locales en relación con delitos y faltas relacionados con la seguridad vial. También, cuando el Fiscal Jefe lo delegue, mantendrá las reuniones y contactos que estime oportunos con Asociaciones de Víctimas en este ámbito.
- 6) Mantendrá en el ámbito territorial, cuando el Fiscal Jefe lo delegue, la actividad de colaboración y participación precisa con los servicios y entidades (públicas y privadas) que tengan como función promover, garantizar e investigar la seguridad vial.
- 7) Realizará actuaciones encaminadas a velar por los derechos de las víctimas de la violencia vial.
- 8) Promoverá el debido cumplimiento de las comunicaciones interinstitucionales

relativas a su área funcional. (Así, por ejemplo, las Instrucciones de la Fiscalía General del Estado 4/1991 de 13 de junio, 2/1999 de 17 de mayo y 1/2003 de 7 de abril instan a que cuando se solicite el sobreseimiento o se dicte sentencia absolutoria en procedimientos por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en su caso se pida al Juzgado que notifique la pertinente resolución a la Jefatura Provincial de Tráfico por si la conducta mereciere reproche como ilícito administrativo).

- 9) Remitirá al Fiscal de Sala los escritos de acusación, informes, testimonios de actuaciones, sentencias y recursos sobre la materia que revistan singular transcendencia.
- 10) Participará en las reuniones que periódicamente se celebren con el Fiscal de Sala Coordinador con vistas a unificar criterios.
- 11) Elaborará un informe semestral que será remitido al Fiscal de Sala Coordinador, en el que se harán constar las estadísticas semestrales, reuniones mantenidas con autoridades y agentes sociales, referencia a asuntos de mayor transcendencia o complejidad y las cuestiones o problemas sustantivos, procesales o relativos a la organización del servicio que se planteen.
- 12) Se encargará, cuando el Fiscal Jefe lo delegue, de la llevanza de los Registros de la Sección.
- 13) Dará cuenta al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de las diligencias o procedimientos que puedan merecer la consideración de “especial transcendencia” a los efectos de su posible intervención directa.

Una vez estudiadas las funciones teóricas principales de los integrantes de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Seguridad Vial, veamos algún ejemplo práctico en el que se han materializado esas funciones.

Por un lado, podemos señalar la creación del Foro de Seguridad Vial, donde cada Fiscal Delegado estructura un archivo con toda la información, sentencias de Audiencias, cifras estadísticas administrativas y judiciales, artículos o trabajos de interés elaborados en su territorio sobre seguridad vial, planes de actuación, de movilidad vial, etc. que den una idea lo más aproximada posible del estado de la seguridad vial en su provincia o comunidad autónoma y del desarrollo de las funciones del Ministerio Fiscal en ella.

Por último, podemos citar también la iniciativa del Fiscal de Sala de Seguridad Vial y del Fiscal Jefe de Alicante dirigida a incorporar en la fase de instrucción penal de las causas por delitos contra la seguridad vial más relevantes (homicidios imprudentes y supuestos agravados de reincidencia) un informe pericial criminológico sobre el imputado como instrumento auxiliar para decidir la imposición de las consecuencias jurídicas más idóneas.